



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín, primero de noviembre de dos mil veintitrés

Radicado: 05001 31 03 018 2023 00029 01

Decisión: Confirma

ASUNTO

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto proferido el 21 de septiembre de 2023 por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

1. Actuando a través de apoderado judicial, Álvaro Maestre Rocha presentó demanda con pretensión de impugnación de actas de asamblea frente a la Institución Universitaria Visión de las Américas. Con fundamento en el artículo 382 del CGP, solicitó las siguientes medidas cautelares:

- La suspensión provisional de los efectos de las decisiones tomadas en la asamblea extraordinaria de la Institución Universitaria Visión de las Américas del **24 de noviembre de 2022** consistentes en: excluir al demandante como miembro principal de la asamblea, no permitiéndole votar ni actuar a través de suplente; designar a un miembro benefactor y la aprobación del valor de los derechos pecuniarios, exenciones y auxilios para el año 2023.
- Ordenar al miembro benefactor “designado irregularmente” que se abstenga de participar en las reuniones de la asamblea general hasta

que se ponga fin al juicio, y a esta, que se abstenga de reproducir en sesiones futuras, los actos o decisiones impugnadas.

2. Mediante auto del 27 de enero de 2023 se admitió la demanda, y el 9 de marzo siguiente se exigió a la parte demandante que prestara caución previo a resolver sobre las cautelas. Luego, el 13 de marzo, se le requirió para que justificara las razones de hecho y de derecho por las que solicitó la suspensión de la decisión impugnada, y para que indicara su necesidad y la relación existente entre la irregularidad denunciada y el eventual perjuicio que se ocasione.

3. En auto del 21 de septiembre de 2023, el *a quo* no decretó la medida cautelar. De una parte, encontró que, de conformidad con el artículo 590 del CGP, el demandante se encuentra legitimado para solicitarla. Posteriormente analizó lo que concierne a la “amenaza o vulneración del derecho en correlación directa con la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida” para concluir:

i) Que es cierto que en la asamblea demandada no se permitió el voto al demandante y por esto no pudo designar a un miembro benefactor ni votar para definir el valor de los derechos pecuniarios, exenciones y auxilios del año 2023.

ii) Que, según el acta de la asamblea del 24 de noviembre de 2022, el actor participó con voz, pero sin voto, en virtud de una decisión adoptada anteriormente al considerarse que persistía la inhabilidad para actuar en una doble calidad, conforme al código de buen gobierno de la demandada.

En ese sentido, advirtió que esa imposibilidad de ejercer el voto proviene de una decisión anterior de la asamblea, pero no fue adoptada en esta oportunidad. Así, estableció que, como la decisión se limitó, materializó y concretó a la respectiva asamblea, cuando la misma llega a su fin se agota la diligencia en que se niega al rector que pueda votar; encontró entonces que

la medida se revela como atemporal para impedir los efectos de impedir que se le niegue el derecho a votar en la toma de las respectivas determinaciones.

iii) En lo concerniente a la resolución de nombrar a un miembro benefactor y definir los valores correspondientes a los derechos pecuniarios, exenciones y auxilios para el año 2023, señaló que esto corresponde a una de las funciones de la Asamblea General como órgano de Gobierno de la Institución Educativa y que lo adoptado en aquella reunión resulta pertinente para su normal desarrollo, porque tal designación permite que la asamblea general pueda contar con la cantidad de personas requeridas para sesionar de forma plena de cara al cumplimiento de sus fines.

Respecto de la fijación de los valores de matrículas, exenciones y auxilios, señaló que esta función está vinculada correlativamente al presupuesto del año 2023, para el pago de los gastos de administración, nómina de profesores y empleados, etc., los cuales son requeridos para el cabal ejercicio del objeto social de la Institución de Educación Superior.

Concluyó que esas decisiones no se advierten contrarias a los fines y propósitos para el normal desarrollo del ente educativo demandado, y por ello, no van a contrapelo de sus intereses; la suspensión que frente a las mismas se reclama, no reluce necesaria ni proporcional ni razonable, por cuanto atentaría contra el ejercicio de la actividad educativa y generaría una afectación estructural que pondría en riesgo la prestación del servicio de educación.

3. Frente a esa determinación la parte actora presentó recurso de apelación. Para su sustentación, argumentó:

Que la exclusión del demandante como miembro principal de la asamblea general de la demandada y la imposibilidad de votar no es una decisión que interesa o compete únicamente a una reunión anterior de dicho órgano, pues

es una determinación que ha venido teniendo repercusión e incidencia en todas las asambleas de la institución.

Que, aunque la decisión de excluirlo y de no permitirle votar en la asamblea no haya quedado expresamente en el texto del acta cuyas decisiones se impugnan, es una decisión que se tomó por la asamblea demandada a través de su presidente al inicio de la reunión.

Que se le desconocen sus derechos políticos como miembro fundador, entre los que se encuentra tener voz y voto en las decisiones adoptadas por la asamblea, razón más que suficiente para que se decrete la suspensión provisional de las decisiones tomadas al interior de la asamblea extraordinaria del 24 de noviembre de 2022.

Que la decisión consistente en designar un miembro benefactor con voz y voto afecta gravemente sus intereses pues modifica el *quorum* deliberatorio y decisorio de la asamblea general para todas y cada una de las decisiones posteriores a su nombramiento.

Insistió en que la cautela es necesaria debido a la inminencia de otras reuniones de la asamblea, en donde, pese a ser miembro fundador, no podría participar o vería disminuida su incidencia en la toma de decisiones pese a los derechos que le asisten.

CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el recurso de apelación conforme la competencia atribuida por el numeral 8º del artículo 321 del CGP, según el cual, es apelable el auto que resuelva sobre una medida cautelar.

El artículo 382 *ejusdem* que establece reglas especiales para el procedimiento como el que aquí se tramita, prevé la posibilidad que con la demanda sea solicitada la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. A este

propósito, según el mismo canon normativo, deberá tenerse en cuenta (i) la violación de las disposiciones invocadas por el solicitante cuando esta surja del análisis del acto demandado, (ii) su confrontación con las normas, el reglamento o los estatutos respectivos invocados como violados, o (iii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Para que se acceda a la pretensión cautelar, la referida disposición se debe aplicar en armonía con lo previsto en el artículo 590 del CGP, relativo a las medidas cautelares en procedimientos declarativos, a saber: la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad.

Los anteriores elementos fueron analizados por el *a quo* quien no los encontró reunidos y por tanto no decretó la cautela. La parte demandante discrepa de los argumentos que el juez de primera instancia ofreció para negar la suspensión de las decisiones tomadas mediante la asamblea extraordinaria del 24 de noviembre de 2022. A su juicio, de la sola exclusión y la imposibilidad de votar en las asambleas devienen graves perjuicios.

Desde ahora, sea preciso advertir que esos graves perjuicios que invoca el demandante no se concretaron en una circunstancia específica más allá de sostener que con la decisión cuestionada no ha podido votar ni hacer valer su posición como miembro fundador de la institución, con voz y voto. Por consiguiente, corresponde en esta instancia determinar si en el caso concreto están dadas las condiciones para que se decrete la suspensión de las decisiones impugnadas.

Si se compara la pretensión cautelar de suspensión con el *petitum* de la pretensión principal y subsidiarias reclamadas por el actor, se advierte que ambas coinciden. Nótese que a través de la pretensión cautelar se pide:

1. (...) la suspensión provisional de los efectos de las decisiones tomadas al interior de la asamblea extraordinaria de INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMERICAS: de (i) de excluir al señor ÁLVARO MAESTRE ROCHA como miembro principal de la

Asamblea, no permitiéndole votar ni actuar a través de un suplente, (ii) de designar a un Miembro Benefactor y (ii) de la aprobación del valor de los derechos pecuniarios, exenciones y auxilios para el año 2023, de fecha 24 de noviembre de 2022 a las 3:00 pm por contrariar de forma evidente los Estatutos de la entidad demandada:

2. (...) ordenar, al miembro benefactor designado irregularmente, esto es, el señor JULIAN PINEDA ALFARO, que se abstenga de participar en reuniones de Asamblea General, hasta tanto se decida la impugnación solicitada.

3. (...) ordenar a la Asamblea General de la entidad demandada, se abstenga de reproducir, en sesiones futuras, los actos o decisiones impugnadas.

Por su parte, en las pretensiones principales y subsidiarias, el *petitum* está vinculado básicamente con lo mismo: declarar que las decisiones cuya suspensión se solicita como medida previa adolecen de nulidad absoluta, o que se declare que son ineficaces, o que son inexistentes, o que son inoponibles, y en todo caso, que se dejen sin efectos.

Fíjese que en la petición elevada en la medida cautelar y en las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias, se busca que las decisiones demandadas no surtan o se dejen sin efectos. Confrontadas las solicitudes de todas ellas, la Sala encuentra inconveniente estimar la tutela cautelar deprecada en este procedimiento. Concederla en la fase inicial del trámite sólo puede hacerse a partir de la confirmación de unas situaciones excepcionales claramente determinadas en la ley.

En el caso concreto resulta inviable anticipar un análisis de fondo del debate, sin permitir el agotamiento de la contradicción y el desarrollo de las etapas propias de este proceso. Dejar sin efectos las decisiones impugnadas implicaría prescindir de un debate probatorio que se requiere para el asunto *sub examine*, máxime cuando las pruebas allegadas con la solicitud no le permiten aún al juez obtener la certeza requerida para acceder a la tutela cautelar.

Si bien la efectividad de las decisiones jurisdiccionales debe ser una prioridad para el juez y en este contexto puede justificarse la necesidad de ordenar

medidas cautelares en situaciones excepcionales, esto no puede ir en detrimento de la prudencia y mesura que debe estar presente en el director del proceso, con mayor razón cuando debe garantizarse el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandada. Resulta imprescindible en casos como el presente confrontar ambas perspectivas de los dos extremos de la relación jurídico procesal. No solo las afirmaciones, sino también las eventuales defensas o excepciones.

El *a quo* no encontró, en este caso, la amenaza o vulneración de los derechos del actor en correlación directa con la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Estos son elementos que, aunque no estén explícitamente señalados en el artículo 382 *ib.*, lo cierto es que, como se dijo, al tratarse de una medida cautelar que lleva consigo la afectación de los derechos de la parte demandada, deben verificarse en cada situación particular, según las previsiones generales de las medidas cautelares para los procedimientos declarativos.

La Sala Unitaria coincide con los argumentos ofrecidos por el juez de primera instancia. Si no se advierten unos requisitos mínimos como son los que acertadamente el *a quo* analizó, resulta inviable estimar la tutela cautelar. Es inadmisibles que, con una mera afirmación y el anexo que aporta la parte demandante, se den órdenes que, de entrada, no tienen la necesidad y la apariencia de buen derecho que las reglas procesales exigen.

Inviabilidad resulta generar pronunciamientos previos con ese tipo de prueba aportada con la demanda. Fíjese que, en este caso, hay una relación estrecha entre las decisiones impugnadas: la designación de un miembro benefactor de la asamblea general resulta necesaria para que este órgano de la institución demandada pueda tener *quorum* deliberatorio y decisorio. Este a su vez, es indispensable para tomar decisiones como la que en este caso se demandó: la fijación de los derechos pecuniarios para el año en curso. Con esta determinación, no se busca otra finalidad que la obtención de los recursos encaminados al funcionamiento del ente educativo demandado lo que

implica el desarrollo de su objeto social determinado por la oferta académica de programas de educación superior.

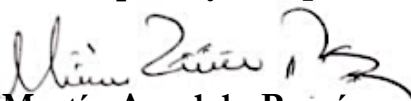
La suspensión de tal acto, implicaría *per se* poner en riesgo el cumplimiento de las actividades académicas desarrolladas por la demandada, lo que a la postre podría afectar a toda la comunidad académica. La cautela, en todo caso, debe mirarse en una doble vía: el derecho que le asiste al demandante para asegurar el fin perseguido con la pretensión, así como la afectación de los derechos de los que es titular el demandado. Atender a las súplicas de la parte recurrente implicaría pretermittir esa doble dimensión, máxime si no se verifica de bulto esas condiciones excepcionalísimas que establecen las normas procesales.

Así las cosas, al advertirse que los argumentos planteados por el impugnante no logran desvirtuar las razones ofrecidas por el juez de primera instancia para no acceder al decreto de la medida y al no encontrarse acreditada la necesidad, urgencia y razonabilidad de la cautela en cuestión, la decisión recurrida habrá de ser confirmada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión Civil, **RESUELVE: Confirmar** el auto del 21 de septiembre de 2023 proferido por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medellín, en virtud de lo expuesto en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase


Martín Agudelo Ramírez
Magistrado